

Democratización de la energía y diversificación de la economía¹

Entrevista a la ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres (Colombia)

Entrevistadora: Sandra Rátiva Gaona*

Palabras clave: Colombia, transición energética justa, crisis climática, justicia ambiental

Keywords: Colombia, energetic transition, climate crisis, environmental justice

La ministra de Minas y Energía Irene Vélez Torres² tiene como responsabilidad impulsar una transición energética justa en Colombia, donde el Gobierno de Gustavo Petro Urrego y Francia Márquez Mina llegó al poder en agosto de 2022 con una agenda progresista, que se anunciaba como representante de las demandas de cambios sociales expresadas en las movilizaciones populares de 2019 y 2021, incluida la agenda ambiental. El actual Gobierno colombiano ha planteado hondos debates al interior de un país tradicionalmente de derechas, pero también ha encarado polémicas globales, como los vínculos entre degradación ambiental, crisis climática y legalización de las drogas, o como las desigualdades internacionales derivadas del modelo extractivista.

Agradecemos la disposición de la ministra Vélez Torres para conversar sobre transición energética y para ahondar en algunos puntos que se vienen adelantando desde el Ministerio de Minas y Energía en Colombia y que sin duda enriquecen el debate internacional.

* Ambientalista colombiana. Instituto de Ciencias Sociales y Humanas Alfonso Vélez Pliego, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. *E-mail:* agarimas2@gmail.com.

¹ La entrevista completa puede consultarse en <https://www.ecologiapolitica.info/entrevista-a-irene-velez-torres/>.

² Véase: <https://twitter.com/IreneVelezT> y <https://irenevelez-torres.net/>.

1. El programa de gobierno del presidente Gustavo Petro aspira a convertir a Colombia en una «potencia mundial de la vida», y para esto la cartera de Minas y Energía, que usted dirige, ha hablado de detener las nuevas exploraciones de combustibles fósiles, de hacer realmente eficientes los proyectos actuales de exploración y de mejorar los procesos de explotación en curso. **¿Cuál es el análisis que ustedes han hecho y que dan soporte a esta pretensión del Gobierno colombiano de reducir la dependencia de los combustibles fósiles?**

El debate que hemos abierto como Gobierno obedece a la realidad innegable de que el planeta entero se encuentra en un escenario de crisis climática como consecuencia de la instauración de modelos económicos insostenibles.

El problema trasciende lo económico y está centrado en la supervivencia de nuestro planeta y la vida que lo habita. En ese sentido, hemos sido reiterativos en que las motivaciones para diversificar nuestra economía y nuestra matriz energética y superar la dependencia de los combustibles fósiles son: *a)* las nuevas dinámicas planetarias resultado de los acuerdos y compromisos en la lucha contra el cambio climático, la búsqueda de nuevas fuentes de energía y el establecimiento de nuevos modelos económicos; *b)* el alto riesgo de debilitamiento económico que corremos como país dado el carácter no diversificado de nuestra economía, que, además, depende de la demanda internacional de hidrocarburos y minerales, y *c)* el actual modelo minero energético no ha logrado transformar positivamente las condiciones de vida de las comunidades en los territorios donde se implementan los proyectos.

En cuanto al primer punto, aún estamos a tiempo para llevar a cabo acciones globales en pro de formas de vida más sustentables, y las tendencias globales empiezan a mostrar cambios. A modo de ejemplo, la inversión en exploración está disminuyendo a nivel mundial. Por tanto, cada

vez es más difícil para las compañías de petróleo conseguir recursos (créditos) de la banca internacional para invertir en hidrocarburos. De hecho, el grupo G7 acordó dejar de financiar en el extranjero cualquier desarrollo de combustibles fósiles (carbón, petróleo), desde finales de 2022. Esto implica que aproximadamente 33.000 millones de dólares al año se dejarán de invertir en combustibles fósiles en el mundo y se buscarán nuevos sectores para estos recursos.

Y es así como llegamos al segundo punto: Colombia no es una potencia petrolera ni minera comparada a otros países. De hecho, bajo el panorama anteriormente descrito entrará a competir (como ya lo hace hoy) con un crudo que tiene un alto costo de producción. Sin embargo, las rentas extraordinarias y los ciclos de las materias primas han contribuido a que nuestra economía dependa de la economía primaria basada en productos como el petróleo, el carbón y el oro.

Somos conscientes de la importancia de los recursos fiscales que genera la actividad de los hidrocarburos para el país. Por esta razón, buscamos estimular la exploración y producción de las áreas que tienen licencias en la actualidad, de modo que se garantice el abastecimiento de la demanda nacional y se aproveche la bonanza temporal del mercado de carbón y petróleo. Sin embargo, sería irresponsable con el país y sus generaciones futuras no preparar la economía, la industria y la sociedad para la transición que estamos viviendo a nivel global, y que nos obliga a gestionar los riesgos a los que este cambio nos expone.

Por estas razones, y abordando el último punto, surge la necesidad de una nueva economía y una matriz energética sustentable y justa que tenga como centro la vida y esté comprometida con la lucha contra las desigualdades.

2. Ha sido tan interesante como polémico escuchar las declaraciones y aclaraciones del presidente Petro y de usted, ministra, acerca de los impactos del cambio climático en países tan diversos y a la vez tan frágiles ecológicamente como Colombia, y la relación entre esta vulnerabilidad y la desigualdad que se ha acumulado a lo largo de la historia del país. **¿Cómo se relaciona la crítica a las desigualdades internas e internacionales y la transición energética? ¿Podemos hablar de una perspectiva anticolonial del cambio climático?**

Hoy en el Gobierno estamos poniendo sobre la mesa el tema de la crisis ambiental y climática que enfrenta nuestro planeta y que viene desde la Revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII.

El escenario en el que nos encontramos hoy, con un calentamiento global de 1,1 °C por encima de la temperatura de la era preindustrial, ha resultado en fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes y más intensos que generan la degradación de los ecosistemas y las comunidades que allí habitan, y agudizan las desigualdades sociales.

Paradójicamente, somos los países del Sur global los que menos gases de efecto invernadero emitimos, pero somos los que más sufrimos las consecuencias del cambio climático.

No obstante, los combustibles fósiles y los productos de las industrias extractivas siguen siendo nuestros principales bienes de exportación, pues representan el 50,6 por ciento del valor FOB (*Free onboard*)³ total de nuestras exportaciones⁴. Lo que nos ubica en un sistema económico sumamente colonial como un país exportador de los recursos no renovables que alimenta la maquinaria productiva de las potencias mundiales.

Por el otro lado, la vulnerabilidad de América Latina frente al cambio climático es mayor que la de países desarrollados debido a que las condiciones de pobreza e inequidad agudizan los impactos. En el caso específico de Colombia, estas condiciones climáticas adversas llegan a afectar el sistema productivo del país. Además, el panorama de injusticia e inequidad intensifica las afectaciones de la crisis climática en las poblaciones vulnerables afectadas históricamente por la violencia y la acumulación desigual de la riqueza.

Por estas razones, hoy como Gobierno hablamos de una transición energética justa. Esta apuesta representa un nuevo modelo minero-energético y económico para construir una economía descarbonizada y productiva. Al buscar superar las desigualdades que históricamente ha sufrido nuestro país, la venimos construyendo de forma participativa con todas aquellas personas que han sido marginadas. Hoy las voces de las diferentes comunidades étnicas, las mujeres, la población rural y los jóvenes se tienen en cuenta para cimentar esta nueva orientación nacional.

3. Hemos visto en los progresismos una enorme dificultad para consolidar transformaciones en las estructuras productivas, económicas y financieras, que son las que generan presiones ecológicas y aceleran los procesos de degradación socioambiental. **¿Cómo puede el Estado intervenir en dinámicas de mercado que van más allá de las fronteras nacionales, como el tema energético?**

Desde una posición en la periferia de los centros de consumo de energía global, es clave entender las dinámicas económicas, tecnológicas y geopolíticas en materia de transición energética a nivel global. A nivel internacional, hay dos de-

³ Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes (DANE).

⁴ Véase: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones>.

sarrollos de particular importancia para Colombia. El consumo de carbón térmico, especialmente en la cuenca Atlántica, y el consumo de petróleo, sobre todo el pesado y el ultrapesado, que es el de mayor exportación.

En 2021, por ejemplo, Colombia exportó el 89 por ciento del carbón y el 63 por ciento del petróleo que extrajo, lo que representó ese año el 40 por ciento del valor total de las exportaciones colombianas. Como ya he explicado, el país depende en gran medida del comportamiento del consumo externo para poner en el mercado no solo sus dos principales energéticos, sino sus dos principales productos de exportación.

Estamos seguros de que el país tiene que aprovechar los períodos de bonanza en el mercado del carbón y el petróleo, como lo estamos haciendo hoy. Pero también debe estar preparado para cuando se empiecen a configurar escenarios de declive estructural en la demanda y los precios. Esta no es solo una tarea del Ministerio de Minas y Energía; estamos trabajando articulados con otras entidades del Estado para apostar por la diversificación económica y una reconversión productiva proactiva, preventiva y equitativa.

Tenemos el desafío de preparar a todo el sector minero-energético del país ante posibles declives en la explotación y la exportación de combustibles fósiles, así como de fortalecer la gobernanza de cierres mineros y, de la mano del Ministerio de Ambiente, la atención a impactos, posiblemente a perpetuidad, de las actividades extractivas.

Todo el Gobierno nacional está articulado para promover esquemas de sustitución de combustibles fósiles, en especial allí donde ya es técnicamente posible y relativamente costo eficiente (por ejemplo, cocción con estufas de inducción en estratos 4-6 o movilidad eléctrica en vehículos de dos y tres ruedas). Estamos promoviendo, de la mano del Ministerio de Industria, que la mayor parte posible de las tecnologías para la transición energética justa se fabrique

en Colombia y apoye los esfuerzos tanto de la reindustrialización a escala nacional como de la diversificación económica en los departamentos más dependientes de los combustibles fósiles.

Por último, pero no menos importante, estamos desarrollando, de la mano de los territorios y sus habitantes, un nuevo modelo de relaciones socioterritoriales alrededor de los proyectos minero-energéticos.

4. Está claro que para el Gobierno de Gustavo Petro es una prioridad construir una *paz total* para Colombia, que tuvo un momento muy importante con la firma del acuerdo de paz de 2016. Pero, puesto que varias de las regiones afectadas por la guerra han sido simultáneamente zonas petroleras y de proyectos energéticos, nos gustaría que nos contara **cómo se está abordando la construcción de la paz desde la agenda de transición energética justa**.

Una de las prioridades de este Gobierno es la paz total, una oportunidad para que todas y todos los colombianos podamos vivir una vida digna y construyamos un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

El extractivismo en Colombia tiene una particularidad que lo diferencia del resto de los países de América Latina: el uso intensivo de la violencia para promoverlo, en este caso asociada al Conflicto Interno Armado.

En ese sentido, la transición energética justa tiene dos grandes retos para construir la paz total.

En primer lugar, debe contribuir al desarrollo de condiciones de vivienda digna en los territorios. Aunque el panorama de cobertura eléctrica es optimista, teniendo en cuenta que solo el 3,7

por ciento de los hogares colombianos no acceden a este servicio, hay un desafío especial pues el 73 por ciento de estos hogares se localizan en zonas no interconectadas, es decir, zonas donde también hay otras necesidades básicas insatisfechas y problemas de conflicto armado. Estamos comprometidos con el cumplimiento del punto del acuerdo referente a garantizar condiciones de vida digna a través del Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), con el propósito de ampliar la cobertura de energía eléctrica en zonas rurales.

Además, una de nuestras propuestas es promover iniciativas energéticas de las comunidades, lo que permitirá que muchas familias colombianas se asocien para generar su propia energía por medio de fuentes renovables. Esto, además, contribuirá con la economía de sus hogares, ya sea gracias al ahorro o al desarrollo de proyectos productivos. En segundo lugar, esta apuesta es para nosotros una gran oportunidad de equidad y de justicia ambiental, de justicia retributiva y de la lucha por los derechos humanos en los territorios extractivistas. Buscamos que todos los proyectos del sector tengan un enfoque étnico, territorial y de género, que contribuya al bienestar social de todo el país.

5. En el período neoliberal hemos presenciado un masivo proceso de privatización, paralelo a la ampliación de las fronteras extractivas, que ha vulnerado derechos de pueblos, territorios y ecosistemas. En el marco de estos regímenes de propiedad transnacional, de marcos regulatorios que dejó el neoliberalismo, **¿cómo se está concibiendo a las comunidades energéticas? ¿Y cómo se articula esta propuesta con las inversiones extranjeras en megaproyectos de fuentes eólicas, solares o de hidrógeno?**

La transición energética justa confronta este modelo al apuntar a que el Estado tenga más soberanía y más capacidad de decisión sobre su propio suelo y recursos, y que, como consecuencia, los beneficios se distribuyan a

lo largo y ancho del territorio nacional. Esta apuesta busca transitar hacia un nuevo modelo económico productivo y una matriz energética diversificada y sostenible. Esto último solo es posible si, además del cambio de tecnología, se articulan discusiones sociales, económicas y ecológicas que conlleven transformaciones estructurales.

Dentro de esta gran apuesta, nos referimos a la democratización de la energía en el sentido más amplio, es decir, a lo largo de toda la cadena de producción.

Esta visión de un nuevo modelo energético en el país no va en contravía con el mensaje que queremos dar de confianza a los inversionistas de proyectos de fuentes de energía no convencionales. Sabemos que Colombia tiene grandes potencialidades, sobre todo por su alta disponibilidad de fuentes de energía renovable (solar, eólica, biomasa y recursos hídricos). Por ejemplo, dada su privilegiada ubicación geográfica, se prevén bajos costos de producción de electricidad y, por ende, bajos costos en la producción de hidrógeno verde.

Los inversores tienen la oportunidad de elegir entre una amplia variedad de proyectos de energía verde, geotérmicos y eólicos, que se adapten a sus necesidades y objetivos, y contribuyan a la sostenibilidad ambiental.

Este tipo de proyectos ofrecen una rentabilidad atractiva. Según el BID (Banco Internacional de Desarrollo), los proyectos de energía verde, gas, geotérmicos y eólicos en el país tienen un TIER o IRR de entre el 7 y el 15 por ciento.

De modo que otro de los objetivos de la transición energética justa es reubicar a Colombia en el sistema mundial, no solo como una despensa de recursos o alimentos, sino como una nación generadora de nuevas tecnologías, de propuestas ambientales, energéticas y económicas para sustituir la economía carbonizada que ignora las necesidades sociales y ambientales. ■